

Financiamiento público a partidos políticos: Evolución y prospectiva

Hugo Efrén DE JESÚS ABAD¹
Jorge RESÉNDIZ OLOARTE²

Introducción:

Desde hace tres décadas, el financiamiento público a partidos políticos ha constituido no sólo una prerrogativa de dichas entidades de interés público establecida constitucional y legalmente, sino también ha sido un mecanismo de blindaje para que las fuerzas políticas no tengan injerencias de grupos o actores políticos que puedan llegar a incidir en sus actividades y, en sentido amplio, en las condiciones de competencia electoral. Esto derivado de la expansión de la democracia en México, y en en el resto de Latino América, que ha mostrado la creciente complejidad de los procesos electorales y de la concientización de los efectos de la corrupción en todo el aparato estatal. De esta forma, se ha colocado a los asuntos electorales y en particular al financiamiento público de los partidos políticos en el centro de la agenda política de los últimos años.

No obstante lo anterior, desde hace algunos años en México, y de manera especial en los últimos días, se han presentado iniciativas de reforma constitucional y legal que han planteado su reducción o, incluso, su eliminación, pasando por alto, considerar, las implicaciones que una determinación de esta naturaleza podría traer aparejadas. Ya que, como lo afirma Daniel Zovatto: “la democracia no tiene precio, pero sí un costo de funcionamiento”. (Zovatto, 2019:801) Lo que significa que acorde al modelo capitalista imperante en el mundo el uso de recursos económicos es indispensable para la competencia electoral, y más aún, para el sostenimiento de una democracia representativa. Por este motivo, consideramos que regular adecuadamente el financiamiento

Atento a lo anterior, la presente ponencia se distribuye en cuatro apartados principales, en donde profundizaremos el tema del financiamiento público de partidos políticos en México, con el objetivo de dar una posible tesis que ayude a que el sistema de partidos mexicano resulte eficiente, funcional y, sobre todo, atienda las necesidades y exigencias de la sociedad contemporánea.

¹ Alumno de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. E-mail: hugo.dejesus@estudiante.uacm.edu.mx

² Maestro en Políticas Públicas Comparadas, FLACSO. Asesor de Consejero Electoral en el Instituto Nacional Electoral. E-mail: jorgeresendiz00@gmail.com

En el primer apartado, se realizó un análisis comparado del financiamiento público de partidos políticos en algunas democracias de Latino América y de Estados Unidos, centrando nuestro análisis en el nivel de regulaciones y blindajes que tienen los diferentes países en relación al financiamiento público, ya que la mayoría, incluido nuestro país de estudio, han implementado el sistema mixto, a excepción de casos contables en Latino América y de Estados Unidos.

En el segundo apartado, se llevó a cabo una revisión histórica del desarrollo de la regulación del financiamiento de partidos políticos en México, en donde se parte de la reforma constitucional de 1963 con la inclusión de la figura de “diputados de partido”, que si bien, no se contaba con un financiamiento público directo sí se tenía tácitamente la exención de algunos impuestos; hasta la reforma política de 2007, generada en virtud del conflicto post electoral de 2006, en la cual se ve reflejada las últimas modificaciones al financiamiento de los partidos políticos en México que sigue vigente hasta el día de hoy.

El tercer apartado, versa sobre las propuestas e iniciativas de reforma en materia de financiamiento público a partidos políticos que se han presentado recientemente, de las cuales se advierte que las mismas guardan alto grado de coincidencia y semejanza, pero fue posible detectar diversas propuestas que destacan, ya sea por la frecuencia de las mismas o por sus posibles repercusiones en el sistema de partidos políticos. Por este motivo, se decidió el análisis de tres iniciativas que, se considera, reflejan las distintas propuestas que se han presentado sobre el tema, todas las cuales coinciden en la reducción del financiamiento público, pero varían en sus fórmulas de cálculo y procedimientos para su asignación.

En el último apartado, se plantean un ejercicio de prospectiva sobre en qué sentido debiera darse una eventual reforma al sistema de financiamiento a partidos políticos para lograr mayor eficiencia en el sistema de financiamiento público, pero sin afectar o generar retrocesos en los avances que se han alcanzado en las últimas décadas en aras de mayor equidad y transparencia y que ello contribuya, asimismo, a revertir situaciones irregulares o de desventaja que impiden la plena competencia electoral en condiciones de equidad entre las distintas fuerzas políticas y sus candidatos.

1. Tipos de financiamientos a partidos políticos

Si bien, en la actualidad, la ciencia política y la sociología, entre otras disciplinas, han desarrollado un creciente interés en torno al financiamiento de los partidos políticos, el cual ha desembocado en una amplia literatura y una cantidad aún mayor de tesis y antítesis que se proponen para la innovación de un sistema mejor, más eficiente y menos costoso para las

distintas sociedades de México y el mundo; es preciso subrayar que aún estamos lejos de encontrar un modelo ideal, lo cual se ve reflejado en las sociedades actuales, las cuales se encuentran en una situación de desconfianza de sus representantes y gobernantes.

Otro aspecto a destacar es la existencia de diversas modalidades de financiamiento a partidos políticos y que las características distintivas en un país son prácticamente irrepetibles en otros, debido a su cultura, su economía, su política, su sociedad, entre otros factores. Incluso, en el mismo país, lo que resultó una fórmula exitosa en algún momento no garantiza que aplicarlo en la actualidad tenga los mismos resultados, debido a que las sociedades están en constante cambio y evolución, lo que evidencia la necesidad de estar constantemente analizando el estatus quo, para resolver las necesidades, exigencias de nuestra sociedad, las áreas de oportunidad de diversos rubros y, en este caso, nuestra democracia representativa y el sistema político electoral.

a) Las bases del financiamiento a partidos políticos: Público, Privado y Mixto

Durante el desarrollo de las democracias representativas, a lo largo de la historia, se ha visto que la implementación de regulaciones sobre el financiamiento a partidos políticos se ha asociado a una evolución, que llega a su punto medular con la implementación de dicho financiamiento con miras al cumplimiento de determinados fines y la observancia de normas y principios. De este punto deriva la principal división que llevará, en principio, un amplio debate en las sociedades modernas sobre, si hay algún modelo ideal y, de ser el caso, cuál es éste, si el privado, el público o, como la gran mayoría de países en América Latina, mixto, combinando componentes de financiamiento público y privado, con diversos grados de regulación.

Incluso Maurice Duverger, uno de los pioneros en problematizar sobre el financiamiento a partidos políticos, fija uno de sus numerosos análisis en este punto, clasificando entre partidos de cuadros y partidos de masas, señalando sus principales diferencias entre los partidos como entes privados o semipúblicos; como plataformas subvencionadas por ciertas élites o entidades necesitadas de los recursos del mayor número de militantes posible. (Duverger 1957, 35-46).

El siguiente momento que marca en términos teóricos y prácticos la evolución de la democracia representativa es la regulación pública de los partidos políticos y su introducción en las constituciones como reconocimiento a su protagonismo en la construcción de las democracias y, por lo tanto, la regulación de sus ingresos y egresos. Al respecto, autores como Von Beyme (1995, 169) y Del Castillo (1985, 3) aseguran que la estatización de las organizaciones partidistas fue consolidada sobre todo en la financiación pública de los partidos;

derivado de dos puntos claves: el crecimiento de las necesidades económicas de los partidos, consecuencia del incremento en los gastos electorales y de los gastos de mantenimiento permanente de la organización y la crisis en los sistemas tradicionales de financiación para hacer frente a una nueva situación de crisis de militancia. De esta manera resultaba coherente la financiación pública directa de los partidos políticos en los países occidentales, esto debido a su favorable posicionamiento que se produce tras la Segunda Guerra Mundial. (Ramos, 1998: 326)

El principal argumento que sostuvo el posicionamiento y consolidación de la financiación pública era que podría evitar la desigualdad de oportunidades de los diferentes competidores políticos ya que, democratizando la financiación a las fuerzas políticas, se podrían nivelar las diferencias, permitir una mayor independencia de sectores económicos y garantizar que los partidos pudieran cumplir las funciones que les encomendaban las constituciones. (*Ibidem*, 327) De esta manera se resolvieron dos de los más importantes problemas que se habían suscitado durante la maduración de las instituciones partidistas en cuanto a su financiación: la desigualdad económica que vulnera el principio de igualdad de oportunidades; y la dependencia política frente a determinados intereses económicos por encima de los sectores sociales representados. Básicamente, los que defienden la financiación pública se amparan en el argumento de que los partidos políticos son instituciones del Estado necesarias para que éste funcione, por lo que su financiación para su mantenimiento y para el ejercicio de sus funciones debe proceder de las arcas públicas. (Zovatto, 2003:59) Por lo que las bases del financiamiento público, en resumen, serían crear condiciones más equitativas en la competencia electoral entre los diversos actores políticos y una mayor transparencia en torno a los recursos.

A mayor abundamiento, de acuerdo con Ace Project, el financiamiento público presenta aspectos positivos tanto para los sistemas de partidos como para el desarrollo de las democracias. Entre dichos beneficios se encuentran que se trata de costos naturales de las democracias; pueden limitar, como ya se mencionó, la influencia de fuentes de financiamiento con intereses particulares y, por lo tanto, contribuye a combatir la corrupción; se pueden fomentar diversos cambios, como la implementación de acciones afirmativas; se fomenta la transparencia en las finanzas de partidos políticos y candidatos; constituyen apoyos a hacer frente a los costos crecientes de la operación electoral, aunado a que en contextos de pobreza o crisis económicas, es posible que las aportaciones de la ciudadanía se reduzcan. (Ace Project 2022).

El financiamiento público, además, puede ser de carácter directo o indirecto, según los recursos se entreguen de manera directa en dinero o bien, a través de otros bienes o servicios, como acceso a radio y televisión, exención de impuestos, franquicias postales y telegráficas, uso de inmuebles públicos, entre otros.

Por otro lado, los argumentos que apuestan por una desregulación de los recursos de los partidos políticos y por dejar que sea el mercado el que actúe como mecanismo dinamizador de las instituciones partidistas, sus principales argumentos parten del supuesto de que los partidos políticos son instituciones privadas por lo que sus apoyos económicos deben provenir del ámbito privado. Y respondiendo a una de las mayores preocupaciones de las sociedades sobre que el financiamiento privado genera dependencia de intereses particulares, los que defienden la financiación privada afirman que siempre que se pongan límites y controles a estas contribuciones, este tipo de financiación supone un mayor enraizamiento de los partidos en la sociedad.

En el mismo sentido, de acuerdo con Ace Project, quienes se oponen al financiamiento público, se basan en que el mismo incrementa las brechas entre élites políticas y ciudadanos; se preserva el estatus que mantiene a los partidos en el poder; los contribuyentes financian a partidos y sus candidatos independientemente de que compartan su ideología u opinión; los recursos que se destinan al financiamiento a partidos políticos podrían destinarse a otras prioridades nacionales como salud o educación; los partidos políticos son los que deciden la asignación de recursos y los que los reciben; se corre el riesgo de profundizar la distancia entre partidos políticos y la ciudadanía. (*Idem*).

Existe, además, una modalidad adicional, el financiamiento mixto, que implica que los países que optan por esta modalidad otorgan apoyos o prerrogativas de naturaleza pública a los partidos políticos, a la vez que se permiten fuentes de financiamiento privadas, con o sin regulación en cuanto a tipología, límites y restricciones para aportaciones, u otros controles.

Tenemos, así, tres tipos o modalidades de financiamiento de los partidos políticos: público, privado o mixto y la adopción o implementación de una u otra dependerá o está en función de las circunstancias particulares del país de que se trate en los ámbitos económico, social, cultural, así como su historia, es decir, las razones que han motivado la implementación de un sistema respecto de otros.

Es importante recordar, como lo menciona Daniel Zovatto, que todo sistema de financiación debe escoger entre tres escenarios posibles en la actualidad: a) financiamiento enteramente público, b) financiamiento enteramente privado o c) un sistema mixto, de los

cuales se desprenden algunas variantes como la financiación pública directa e indirecta, y que por la extensión del trabajo no las trataremos en este momento. (Zovatto 2003, 58)

A pesar de ello, el sistema predominante no sólo en Europa sino también en la mayoría de países latinoamericanos, se optó por seguir un sistema de financiamiento eminentemente público, ya sea directo o indirecto. Aunque independientemente de la argumentación a favor o en contra, y como se refirió con anterioridad, no existe un sistema ideal o mejor, sino que cada modelo de financiación se debe adaptar según el país, el contexto social, el tiempo y su contexto histórico. Aunque esto no quiere decir que no se pueda realizar una comparación entre países con una cultura similar, con el objetivo no de reproducir los mismos sistemas sino como forma de evaluación comparada en donde destaquemos los rasgos distintivos y realicemos una autocrítica de nuestros sistemas. Con esta visión, consideramos pertinente realizar un análisis comparativo entre los sistemas de financiación de partidos políticos que se encuentran en Latinoamérica

b) Análisis comparativo

Los países latinoamericanos son un ejemplo emblemático de la implementación de las distintas modalidades de financiamiento a partidos políticos descritas en el inciso anterior, a saber, público, privado o mixto y, vale reiterar que, la adopción o implementación de una u otra está en función de las características y circunstancias particulares del país.

En el caso mexicano, y como se desarrolla en el apartado siguiente, se ha optado por un sistema mixto en el que prevalece el financiamiento público sobre el privado y existen límites y controles para el financiamiento privado, aunado a que existe un andamiaje normativo e institucional en materia de fiscalización, lo que permite tener conocimiento de manera oportuna y veraz sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de los partidos políticos, de manera que la fiscalización deviene, más que un proceso eminentemente sancionatorio, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía, que es la que en última instancia debe conocer el comportamiento contable y financiero de los partidos políticos en su calidad de entidades de interés público, aunado a que si se advierten o detectan irregularidades o inconsistencias, se puedan adoptar las medidas atinentes para restablecer la legalidad violentada.

Una vez precisado lo anterior, es de señalar que la doctrina especializada ha detectado que los países de la región se caracterizan eminentemente por sistemas mixtos de financiamiento a partidos políticos con excepciones como Venezuela. A pesar de tratarse de una misma modalidad de financiamiento a partidos políticos, las diferencias entre países

radican en la amplia o reducida regulación que le da cada país a su límites públicos y privados. De esta forma, mientras algunos ordenamientos cuentan con normas detalladas en materia de financiamiento, como en los casos de México, Brasil y Ecuador, otros países, en cambio, se caracterizan por contar con regulaciones generales y escasas, como es el caso de Chile, Perú y Uruguay. (Zovatto, 2003:62)

En cuanto al financiamiento público, en primera instancia, y de acuerdo con el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se implementó de manera inicial en Uruguay, Costa Rica y Argentina en 1928, 1949 y 1957, respectivamente, mientras que durante la década de 1970 se implementó en Venezuela, México, Ecuador y Nicaragua; en la de 1980, Honduras, El Salvador, Colombia, Guatemala y Chile y más adelante, durante la década de 1990, en Paraguay, Perú, Brasil, Panamá, Bolivia y República Dominicana, no pasando inadvertido que en los casos de Bolivia y Venezuela se ha observado que carecen de financiamiento público, luego de las reformas en esos países llevadas a cabo en 2009 y 1999, respectivamente (Reformas Políticas, 2022).

Es importante hacer notar, asimismo, la variación que existe en la instauración de requisitos para tener acceso a la prerrogativa y mantener la misma; cálculo y determinación del mismo, así como los criterios y tiempos para su distribución, ya sea de manera permanente o únicamente durante período electoral (*Idem*).

En cuanto a financiamiento privado, si bien se encuentra permitido en la totalidad de países de la Región, las diferencias radican en la regulación, que abarcan sujetos aportantes; calidad u origen de las aportaciones para distinguir si son públicas o anónimas, así como, en su caso, los topes de aportaciones permitidos (*Idem*).

Tratándose del caso mexicano, y como se refiere en el apartado siguiente, dicha regulación se ha venido instaurando de manera paulatina y con la finalidad primordial de garantizar la equidad de la contienda y blindar a los partidos políticos de injerencias indebidas que pueden afectar su desempeño y provocar distorsiones al sistema de partidos y, en sentido amplio, el sistema político electoral.

Dichas modalidades de financiamiento se han venido reforzando, además, de distintos mecanismos y procedimientos de fiscalización o rendición de cuentas, con la finalidad de que los partidos políticos transparenten su comportamiento contable y financiero, ante la ciudadanía.

Existen, además, casos en los que si bien existen diversas modalidades de financiamiento a partidos políticos, éstas operan de manera distinta. Tal es el caso de Estados

Unidos, en el que el financiamiento privado tiene preeminencia sobre el público y éste último no se implementó sino hasta 1976, siendo destinado eminentemente para campañas electorales.

Al respecto, Sánchez González explica que

Desde sus orígenes, las contiendas electorales en Norteamérica han sido financiadas con dinero privado procedente de individuos, asociaciones empresariales y laborales, sociedades mercantiles y partidos políticos que pretendían, en general, obtener contraprestaciones de diversa índole. La financiación pública, desde que comenzó, se ha destinado a las elecciones presidenciales y siempre ha sido menor y sujeta a determinados condicionantes. Lo cual no significa que no se fuera consciente de los efectos perversos que una financiación exclusivamente privada entraña. (Sánchez González 2000, 72).

Una vez que se han expuesto las modalidades que puede revestir el financiamiento a partidos políticos, se considera necesario analizar, a continuación, cuál ha sido la evolución de esta prerrogativa en nuestro país, hasta su configuración actual.

2. Regulación del financiamiento de partidos políticos en México

Si bien, como se expuso en el apartado que antecede, existen diversos modelos de financiamiento de partidos políticos, es importante señalar que, en el caso de nuestro país el sistema político electoral, que comprende el catálogo de prerrogativas a los partidos políticos, es producto de un largo proceso evolutivo que ha tenido como ejes rectores, por una parte, la inclusión de la totalidad de fuerzas políticas y generación de condiciones para una competencia más equitativa y con posibilidades reales de acceso a cargos de gobierno y representación, lo que fue un factor determinante para la transición de un régimen de partido hegemónico a uno altamente competitivo, diverso y plural como el vigente, que refleja en gran medida las diversas expresiones políticas del país; es decir, se estableció el andamiaje normativo e institucional con arreglo al cual se establecerían las reglas de la contienda política electoral, la integración de los órganos de gobierno y representación, así como los mecanismos y procedimientos de organización de los procesos electorales y la resolución de controversias que se suscitaran con motivo de los mismos.

Otro importante eje rector de la transición a un régimen democrático ha consistido en generar condiciones de competencia equitativa para todas las fuerzas políticas, para lo cual ha resultado indispensable venir adecuando la normatividad, a efecto de erradicar situaciones que generaran ventajas o beneficios indebidos de un partido o fuerza política respecto de otros, o la intervención de grupos o actores que pudieran incidir indebidamente en el adecuado desarrollo de la contienda electoral o en la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En el mismo orden, no pasa inadvertido que la historia político electoral del país se ha caracterizado por un componente de desconfianza, derivado principalmente de fuertes situaciones de inequidad en la contienda e irregularidades en los procesos electorales, lo que generó en diversas ocasiones señalamientos de fraude, circunstancia que se veía agravada por autoridades con marcado conflicto de interés y la falta de un marco legal idóneo que estableciera atribuciones y procedimientos idóneos para conocer y resolver controversias.

Así, en las últimas cinco décadas se han venido generando diversos procesos de reforma en materia político electoral orientados, efectivamente, a generar mayor equidad en la contienda y, por la otra, revertir la desconfianza que privaba en el país para lo cual fue necesario, en primera instancia, generar los órganos competentes y especializados en la materia, excluyendo al gobierno de los mismos; generar las condiciones de competencia electoral, que van desde el reconocimiento de los sujetos contendientes, sus derechos, obligaciones y prerrogativas; la forma de organizar y desarrollar las elecciones; así como la implementación de mecanismos y procedimientos para la resolución de controversias y, más recientemente, la tutela y potenciación efectiva de los derechos políticos de ciudadanos, ampliando el espectro de protección a ciudadanos y a sectores en situación de desventaja o vulnerabilidad.

Una de las medidas adoptadas ha sido la instauración de un sistema de prerrogativas con una doble finalidad: por una parte, generar condiciones de mayor equidad en la contienda entre todas las fuerzas políticas y, por la otra, establecer un blindaje para evitar que grupos o actores ajenos al ámbito electoral pudieran incidir en la equidad de la contienda o, incluso, en el resultado. Sin embargo, como se refirió con anterioridad, este proceso no fue inmediato e, incluso hoy, no se podría afirmar que se trate de un tema agotado, sino que es susceptible de análisis y, eventualmente, una próxima reforma o adecuación. De ello dan cuenta las diversas iniciativas y propuestas que se han presentado recientemente y que repercuten en el modelo y procedimiento de financiamiento público a los partidos políticos en cuanto a los factores de cálculo para su determinación; los umbrales mínimos de votación para tener acceso a la prerrogativa, entre otros aspectos.

Para dar cuenta de la evolución normativa del financiamiento público a partidos políticos, a continuación se expone la regulación que dicha institución electoral ha tenido en distintos ordenamientos:

a) Apertura e inicio del proceso de democratización del sistema político electoral

En la década de 1960 el sistema político electoral mexicano dio las primeras muestras de apertura para dar cauce a la participación e inclusión de partidos políticos minoritarios que si bien no contaban con fuerza suficiente para ganar una elección, sí tenían determinado respaldo ciudadano que, en virtud de la regulación entonces vigente, no encontraba cauces de participación, de acceso a cargos de representación e, incluso, algunos de ellos se encontraban en la clandestinidad.

La reforma constitucional del 22 de junio de 1963 reviste una gran importancia en este punto porque a través de la misma se estableció e implementó la figura de “diputados de partido”, en virtud de la cual fuerzas políticas minoritarias accedieron a cargos representativos, lo que antes no había resultado posible. Dicha figura constituye el antecedente directo del principio de representación proporcional (CPEUM, Artículos 54 y 63, 1963).

Es importante destacar que si bien en esa época los partidos políticos no contaban con financiamiento público, ya contaban con algunos apoyos a sus actividades, los cuales fueron establecidos mediante decreto de reformas y adiciones a la entonces vigente Ley Electoral Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963.

A través de esa reforma se adicionó un artículo 44-Bis, el cual determinaba, en lo esencial, que los partidos políticos gozarían “de la exención de los siguientes impuestos: del timbre, que se cause en los contratos de arrendamiento, compra-venta y donación; los relacionados con rifas o sorteos y festivales que tengan por objeto allegarse recursos para fines de su instituto; sobre la renta, que se cause sobre utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles adquiridos por compra-venta o donación para el ejercicio de sus funciones específicas, y el que se cause por la venta de impresos que editen relacionados con la difusión de sus principios, programas, estatutos, propaganda y por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma”. (LEF, Artículo 44-Bis, 1963).

Como se puede observar, desde entonces los partidos políticos fueron adquiriendo relevancia en la configuración y transformación del sistema político electoral, la integración de los órganos de gobierno y representación, así como las reglas conforme a las cuales se desarrollaría la contienda política electoral.

b) Ley Federal Electoral, 1973

Si bien la Ley Federal Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1973 no establecía aún el financiamiento público como prerrogativa de los partidos políticos, es posible advertir la ampliación en los apoyos que se les otorgaban para sus

actividades. Al respecto, el artículo 39 de dicho ordenamiento establecía como prerrogativas las exenciones de diversos impuestos, tales como los del timbre en los contratos de arrendamiento, compraventa y donación; los relacionados con las rifas y sorteos que celebraran con la finalidad de allegarse de recursos para sus fines; sobre la renta, por la enajenación de inmuebles adquiridos para el ejercicio de sus fines; los generados por la venta de impresos relativos a la difusión de sus principios, programas, estatutos, propaganda y el uso de equipos y medios audiovisuales. En dicho precepto también se establecían como prerrogativas las franquicias postales y telegráficas, así como el acceso a la radio y la televisión (LFE, Artículo 39, 1973).

c) Reforma Política de 1977

El proceso de reforma político electoral que se dio en 1977 fue de gran relevancia para la configuración de un régimen democrático, pues si bien es cierto el sistema político ya venía dando muestras de apertura, no fue sino hasta este año que se dio rango constitucional a los partidos políticos, lo que fue el primer gran paso para la constitución de un auténtico sistema de partidos y mejores condiciones para la contienda electoral.

En virtud del decreto de reformas constitucionales publicado el 6 de diciembre de ese año, se estableció que los partidos políticos son entidades de interés público y que tienen como fin promover la participación de pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Para ello, tendrían derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y debían contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendentes a la obtención del sufragio popular. (CPEUM, Artículo 41, 1977).

Como se puede advertir, en dicha reforma ya se establece la importancia y finalidad de los partidos en la sociedad y que, para su adecuado cumplimiento, debían contar con determinados apoyos y prerrogativas que si bien, como se ha venido señalando, algunos de los cuales ya se preveían en ley, los partidos políticos no contaban con reconocimiento constitucional.

En congruencia con la reforma constitucional referida, el 30 de diciembre de ese año se publicó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, cuyo artículo 48 establecí como prerrogativas de los partidos políticos el acceso permanente a la radio y la televisión; disponer de medios adecuados para sus tareas editoriales; contar de forma equitativa, durante los procesos electorales, con un mínimo de elementos para sus actividades encaminadas a la obtención del sufragio popular; gozar de exención de impuestos y derechos,

así como disfrutar de franquicias postales y telegráficas que resultaran necesarias para el cumplimiento de sus funciones (LFOPPE, Artículo 48, 1977).

Por su parte, el artículo 49 de dicho ordenamiento determinó que la Comisión Federal Electoral determinaría, mediante disposiciones generales, las modalidades, formas y requisitos para el ejercicio de las prerrogativas referidas (*Ibidem*, Artículo 49, 1977).

d) Código Federal Electoral, 1987

La reforma política de 1977 no sólo estableció la constitucionalización de los partidos políticos y, con base en ello, mejores condiciones para la contienda electoral sino además, en virtud de la misma se sentaron las bases para el continuo desarrollo del sistema de partidos y el continuo perfeccionamiento de la organización y desarrollo de los procesos electorales y las vías y procedimientos para la integración de los órganos de representación popular.

En cuanto al tema que nos ocupa, no fue sino hasta la publicación del Código Federal Electoral, el 12 de febrero de 1987, que se hizo referencia expresa al financiamiento público. Al respecto, es importante señalar, en primera instancia, que el artículo 24 de dicho ordenamiento determinó que “Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en este Código, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo” (CFE, Artículo 24, 1987).

En cuanto al financiamiento público propiamente dicho, el artículo 48 del Código en comento estableció que los partidos políticos tendrían derecho, entre otras prerrogativas, a “participar, en los términos del Título Quinto de este libro, del financiamiento público correspondiente para sus actividades” (*Ibidem*, Artículo 48, fracción III, 1987).

Por su parte, el artículo 61 de dicho ordenamiento estableció que los partidos políticos tendrían derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas y de manera adicional a los ingresos por aportaciones de sus militantes y simpatizantes, para lo cual se determinaría el costo mínimo de una campaña electoral de diputado, cantidad que sería multiplicada por el número de candidatos que hubieran contendido para cada elección y sería dividido por mitades. La primera se distribuiría de acuerdo al número de votos válidos obtenidos en la última elección de diputados; la segunda, a razón de los

diputados federales que hubiera obtenido cada partido en la misma elección (*Ibidem*, Artículo 61, 1987).

e) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

El 15 de agosto de 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como una forma de atender los conflictos derivados de la elección presidencial de 1988 y las deficiencias normativas demostradas en la misma.

En materia de financiamiento público se establecieron conceptos adicionales a otorgar a los partidos políticos: por actividad electoral, el cual se determinaba a través del costo mínimo de campaña de diputado y de senador por el número de candidatos registrados a dichos cargos, dividido entre la votación emitida y multiplicado por el número de votos de cada fuerza política; por actividades generales como entidades de interés público; por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos, así como por actividades específicas. Dicho precepto también estableció que no tendrían derecho a financiamiento público los partidos que no hubieran obtenido al menos el 1.5% de la votación emitida, independientemente de que sus candidatos hubieran ganado elecciones de diputado o senador. Asimismo, se establecía la forma en que accederían a la prerrogativa los partidos políticos de registro reciente (COFIPE, Artículo 49, 1990).

Dicho ordenamiento sería reformado en 1993, esta vez para establecer los topes máximos del financiamiento obtenido por los partidos, que fuera distinto al público: 1% para personas físicas y 5% para personas morales (COFIPE, Artículo 49, numeral 11, inciso b), fracción III, 1993).

Adicionalmente, dicho ordenamiento también estableció, por primera vez, una relación de sujetos que se encontraban impedidos para realizar aportaciones a partidos políticos y se estableció la obligación de presentar informes de ingresos y gastos ordinarios y de campaña, los cuales serían dictaminados por la Comisión correspondiente y el Consejo General (*Ibidem*, Artículo 49, numerales 2 y 6; Artículos 49-A, 49-B y 49-C, 1993).

Como puede apreciarse, de manera paralela al otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, se fueron estableciendo límites y controles al ejercicio de los recursos, habida cuenta la importancia de la función electoral, el papel de los partidos políticos en el desarrollo de la democracia y la integración de los órganos de gobierno y representación, así como ante la posibilidad o riesgo de injerencia de sujetos que podrían incidir indebidamente en la equidad en la contienda.

f) Reforma política, 1996

La reforma política en comento resultó determinante para el desarrollo del sistema político electoral del país en su configuración actual. En cuanto al tema que nos ocupa, si bien el financiamiento público se siguió calculando con base en los costos mínimos de campaña, la reforma determinó que, para actividades de obtención del voto, los partidos políticos recibirían un importe igual al que recibían por concepto de actividades ordinarias; se estableció la preeminencia del financiamiento público sobre el privado y se incrementó a 75% el monto máximo de reembolso por el desarrollo de actividades específicas como entidades de interés público.

A través de la reforma en comento se establecieron mecanismos de control más estrictos, como la preeminencia del financiamiento público, la prohibición de aportaciones anónimas, los procedimientos de distribución, todo ello en aras de privilegiar condiciones más equitativas de la contienda y para privilegiar la transparencia y la máxima publicidad sobre los recursos asignados a cada fuerza política.

Todo este novedoso entramado normativo e institucional resultó determinante en las condiciones de la contienda electoral, pues se propició que en los procesos electorales siguientes a la reforma que se analiza el partido político hasta entonces hegemónico perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y más tarde, en la elección presidencial de 2000, se diera por primera vez la alternancia en el Poder Ejecutivo, aunado a que las fuerzas políticas de oposición habían venido incrementando su representación.

g) Reforma política, 2007

Las normas en materia de financiamiento a partidos políticos permanecieron vigentes hasta la reforma política de 2007, generada en virtud del conflicto post electoral de 2006, en el que uno de los candidatos no electos hizo señalamientos de fraude e intervención indebida de sujetos ajenos a la contienda electoral, entre otras irregularidades.

En cuanto al tema que nos ocupa, si bien hasta fines de 2007 el financiamiento público se continuó calculando a partir de los costos mínimos de campaña, en virtud de la reforma que se analiza se modificaría la fórmula de cálculo y determinación del financiamiento público, para establecer que el mismo se determinaría de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del salario mínimo general diario vigente para el entonces Distrito Federal, pero se mantuvo el criterio de asignación en razón de 30% igualitario y 70% proporcional a la fuerza electoral de cada partido.

En cuanto al financiamiento de campaña, la reforma estableció que ya no se asignaría un monto adicional equivalente al de financiamiento ordinario, sino que, tratándose de elección presidencial, se asignaría un monto de 50% y en las elecciones en las que sólo se renovara la Cámara de Diputados, se asignaría 30% adicional.

Otra modificación relevante se observó en el financiamiento de actividades específicas, pues se estableció un porcentaje específico de 3% para actividades de capacitación, educación e investigación.

Si bien no se trata de financiamiento público, también hubo modificaciones importantes en la prerrogativa de acceso a tiempos en radio y televisión, pues el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral es desde entonces autoridad exclusiva para la adquisición y asignación de dichos espacios, quedando prohibido a partidos políticos su adquisición por sí o por interpósita persona.

En la actualidad, si bien la regulación en materia de asignación de financiamiento público no ha tenido variaciones desde la reforma de 2007, salvo por el hecho de que desde 2016 dejó de utilizarse como factor de cálculo el salario mínimo y se sustituyó por la Unidad de Medida y Actualización, es importante destacar que se han venido atendiendo retos o áreas de oportunidad que se han venido detectando y que repercuten en la equidad en la contienda. Tal es el caso, por ejemplo, del financiamiento a candidaturas encabezadas por mujeres.

Al respecto, el Instituto Nacional Electoral ha venido adoptando medidas como la determinación de un financiamiento mínimo de 40% a candidatas como una forma de paliar las desventajas en los apoyos de la actividad proselitista que los partidos otorgan a sus candidaturas, y así contribuir a que se reviertan y corrijan expresiones de violencia política que limitan el derecho de las mujeres a una participación política en condiciones de igualdad y paridad.

Otra medida implementada en este rubro por la autoridad administrativa electoral tiene que ver con el perfeccionamiento de sus sistemas de fiscalización para conocer de manera oportuna y veraz el origen, monto y aplicación de la totalidad de recursos que ejercen los partidos políticos para sus actividades lo que se pone de manifiesto, en primera instancia, por la nacionalización de la función fiscalizadora, lo que implica que el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad competente en la materia y, por excepción, puede solicitar el apoyo de las autoridades electorales de las entidades federativas para actividades puntualmente detalladas en el acuerdo que se apruebe para tal fin. Adicionalmente, se han venido perfeccionando sus atribuciones de investigación, tales como la solicitud de información y documentación que resulte esencial para la resolución de algún caso; las diligencias de inspección y verificación,

los monitoreos de campo y de redes sociales, así como la implementación de un modelo de riesgo para detectar situaciones anómalas en cuanto al financiamiento de los partidos.

Todo ello, rubros que si bien aún presentan áreas de oportunidad y son susceptibles de mejora, es incuestionable que han resultado determinantes para que la fiscalización cumpla sus fines como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Lo hasta ahora expuesto en materia de financiamiento público es observable en la Tabla 1 y Gráfica 1 siguientes:

TABLA 1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO A PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES (1997 - 2023)	
AÑO	MONTO
1997	2,111,493,862.21
1998	1,046,566,954.67
1999	1,312,364,397.62
2000	3,064,092,232.97
2001	2,250,685,592.84
2002	2,439,871,186.19
2003	4,937,046,160.66
2004	1,854,015,953.66
2005	2,013,252,441.28
2006	4,171,096,908.42
2007	2,704,100,762.62
2008	2,690,311,483.58
2009	3,631,639,027.92
2010	2,997,358,834.02
2011	3,212,932,808.88
2012	5,142,514,887.61
2013	3,670,843,752.88
2014	3,925,109,677.11
2015	5,199,695,918.18
2016	3,953,658,321.27
2017	4,059,213,905.00
2018	6,573,389,866.00
2019	4,870,560,864.00
2020	5,138,530,861.00
2021	5,983,766,329.00
2022	5,710,279,010.00
2023	6,114,096,979.00

Fuente: Elaboración propia con información del portal del Instituto Nacional Electoral (INE 2022)



Fuente: Elaboración propia con datos del portal del Instituto Nacional Electoral (*Idem*).

Como se puede observar de la Tabla y Gráfica que anteceden, el financiamiento público a partidos políticos ha venido presentando un incremento continuo y sostenido en los últimos años, particularmente a partir de la reforma de 2007, que modificó los factores de cálculo y determinación del mismo y que son, entre otras, las causas por las que en los últimos años se han presentado diversas iniciativas y propuestas para replantear el otorgamiento de dicha prerrogativa, intentando reducir el monto de la misma, sin afectar la operación de los partidos políticos y el adecuado cumplimiento de sus fines constitucionales.

Es importante recordar que el financiamiento público no sólo tiene la finalidad de garantizar condiciones mínimas de equidad entre todas las fuerzas políticas contendientes, así como evitar la injerencia de sujetos o grupos ajenos a la función electoral y que podrían incidir en la actividad política o el desempeño de los partidos políticos o los gobernantes o representantes emanados de sus filas, de manera que cualquier reforma que se pretenda realizar sobre el tema debe hacerse cargo de los riesgos que subyacen y los efectos en la calidad de la democracia y de la representación que se podrían generar.

3. Propuestas de reforma en materia de financiamiento público a partidos políticos

Aun cuando a través de distintas reformas políticas se ha venido logrando que el financiamiento público procure mejores condiciones equitativas de competencia y constituya un blindaje de las fuerzas políticas ante la injerencia o intervención de grupos o actores ajenos a la función Electoral a través de la determinación de topes, límites y controles al financiamiento privado, todo lo cual se robustece, además, con un sistema de fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos, recientemente se han presentado propuestas e iniciativas de reforma para adecuar el sistema de prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, particularmente las relativas al financiamiento público, bajo el argumento de que los montos que se asignan constituyen altas cargas al erario, lo que se ve agravado, además, por la falta de confianza ciudadana por la que atraviesan.

De las distintas iniciativas y propuestas de reforma que se han presentado, se advierte que las mismas guardan alto grado de coincidencia y semejanza, pero fue posible detectar diversas propuestas que destacan, ya sea por la frecuencia de las mismas o por sus posibles repercusiones en el sistema de partidos políticos. Al respecto, para efectos de esta ponencia, se propone el análisis de tres iniciativas que, se considera, reflejan las distintas propuestas que se han presentado sobre el tema, todas las cuales coinciden en la reducción del financiamiento público, pero varían en sus fórmulas de cálculo y procedimientos para su asignación.

a) Iniciativa del diputado Jesús Manuel Clouthier Carrillo

El 3 de diciembre de 2015, el entonces diputado federal Manuel Clouthier presentó iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional para proponer que el financiamiento público se calculara no con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, sino con base en la votación válida emitida en la última elección federal. En la exposición de motivos, el entonces legislador sustentó su propuesta en el siguiente razonamiento:

...si la sociedad en general vive a diario en un ambiente de restricción y austeridad en el gasto, y los gobiernos por fin han comenzado a comprender que deben conducirse con eficacia y eficiencia en el manejo del mismo, toca también que los partidos políticos nacionales pongan el ejemplo y se comprometan a que sus prerrogativas no aumenten año con año y en cada proceso electoral, sino que las mismas, y específicamente las destinadas a su gasto burocrático ya no sea en base a los millones de ciudadanos integrantes del padrón electoral, sino directamente proporcional al número de votos emitidos en la elección federal inmediata anterior.

[...]

La presente iniciativa tiene como único y firme propósito elevar la calidad de nuestro sistema político y democrático en aras de elevar la participación ciudadana en los asuntos públicos de su país. El hecho de vincular el financiamiento a los partidos políticos con la votación válida emitida generará los incentivos necesarios que para que los partidos políticos nacionales y estatales apuesten por que en cada elección postulen a los mejores ciudadanos de sus ciudades y regiones logrando contar después de la elección con los mejores representantes y funcionarios posibles (Clouthier 2015).

La propuesta de esta iniciativa coincide, en lo medular, con la propuesta que sobre el tema presentó el entonces diputado local por el estado de Jalisco, Pedro Kumamoto, y aun cuando la misma podría tener el efecto virtuoso de que el financiamiento se determine en función de la votación válida que se emitiera, es decir, constituiría un incentivo a los partidos políticos para promover la participación ciudadana, con mejores candidaturas y alto nivel de propuesta y debate, no pasa inadvertido que la participación electoral de la ciudadanía también está en función de la cultura política y democrática que existe, entre otros factores, lo que podría poner en entredicho la eficacia de la propuesta.

b) Iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena

El 14 de abril de 2020, legisladores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, encabezados por el diputado Mario Delgado Carrillo, presentaron iniciativa de reforma constitucional para proponer la reducción del financiamiento público a partidos políticos. Su planteamiento consiste en que el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral no se multiplique por 65% del salario mínimo, sino el 32.5% de la Unidad de Medida y Actualización. Al respecto, los legisladores promoventes razonaban que el financiamiento

público a partidos políticos es muy elevado, mientras que el país enfrentaba crisis apremiantes, como la de COVID-19 y que si bien ya habían presentado la propuesta, ésta no había alcanzado la votación requerida para reforma constitucional, por lo que exhortaban nuevamente a las fuerzas políticas a sumarse a la iniciativa (Delgado 2020).

Es importante señalar, asimismo, que se han presentado diversas propuestas en este mismo sentido, algunas de las cuales modifican el porcentaje por el que se multiplicará el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Tal es el caso de la iniciativa presentada el 23 de junio de 2021 por el diputado David Bautista Rivera, quien propuso multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, por 45% de la Unidad de Medida y Actualización. (Bautista 2021).

c) Iniciativa del Ejecutivo Federal

Ahora bien, el pasado 28 de abril del año en curso, el titular del Ejecutivo Federal presentó iniciativa de reforma de diversas disposiciones constitucionales en materia Electoral para modificar, entre otros rubros, el financiamiento público a partidos políticos. En la iniciativa, el presidente de la República razona que

...la presente iniciativa propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes. El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral (Presidencia de la República 2022).

Dicha iniciativa también refiere que la asignación de recursos para gastos de campaña se llevaría a cabo bajo los criterios de cálculo y asignación vigentes, y que los recursos privados deberán estar debidamente identificados y reportados a la autoridad, los cuales no deberán exceder los topes establecidos, aunado a que ninguna persona podrá aportar a dos partidos políticos en un mismo ejercicio anual o proceso electoral.

Ahora bien, de las iniciativas expuestas se puede advertir que en todos los casos la propuesta de reducir el financiamiento se funda en las altas cargas que representa para el erario y que los recursos que dejaran de asignarse podrían ser aplicados en la atención de otras necesidades en el país, aunado a que los partidos cuentan con amplias estructuras burocráticas, por lo que debiera fomentarse su mayor eficientización.

Sin embargo, ninguna de las iniciativas se hace cargo de los posibles efectos adversos no sólo en cuanto a equidad en la contienda, sino también de la posible intervención de grupos o sujetos ajenos a la función electoral, así como de actos de simulación a la normatividad.

De acuerdo a lo anterior, es claro que es necesario revisar el cálculo y los criterios de asignación de financiamiento público a los partidos políticos y, en congruencia con ello, otras fuentes de financiamiento dentro de los límites y controles que la ley establezca; sin embargo, un posible o aparente beneficio, como lo son las economías no puede ser el único eje rector de esas reformas, máxime cuando lo que se encuentra en juego es la equidad en la contienda y, más relevante aún, evitar que los partidos políticos incurran en actos de simulación e, incluso, pudieran recurrir a fuentes ilícitas de financiamiento, eludiendo los controles de la autoridad.

4. Prospectiva

Como se expuso en el apartado inicial de esta ponencia, no existe un mecanismo único o ideal a ser utilizado o replicado, sin embargo, se pueden advertir elementos que permitan contribuir a determinar la viabilidad de una propuesta u otra, tendente a un diseño normativo e institucional que, sin comprometer los fines del financiamiento público, sí permitan una posible reducción y mayor eficiencia en la asignación de los recursos.

En este sentido, no debe pasar por alto que cualquier reforma que se lleve a cabo al sistema de financiamiento a partidos políticos y su correspondiente fiscalización debe preservar, tutelar e incluso potenciar, los ejes rectores o racionalidades que lo sustentan: establecer un piso homogéneo de condiciones de competencia electoral procurando la equidad en la contienda; así como evitar la intervención de actores o grupos ajenos a la función electoral que incluso podrían ser ilícitos y que podrían interferir en campañas electorales e, incluso, en el desempeño de gobernantes o representantes que resulten electos.

De igual manera, se debe atender no únicamente a un posible o aparente beneficio que, en primera instancia, pudiera considerarse atractivo en las circunstancias actuales del país, sino que debe hacerse un estudio pormenorizado del problema a corregir, el contexto vigente, así como los efectos positivos y negativos de la implementación de cualquier adecuación normativa que se lleve a cabo.

Atento a lo anterior, si bien las iniciativas que sobre el tema se han presentado presentan elementos que necesariamente deben ser materia de estudio legislativo, una eventual reforma debe analizar, adicionalmente, aspectos que se encuentran estrechamente relacionados a la mera determinación del monto de financiamiento público a asignar, como el contexto de la contienda político electoral; cómo fortalecer y promover la equidad en la contienda, evitando

sesgos o acceso a recursos de forma desproporcionada, que coloque a otras fuerzas políticas en notoria desventaja para su operación ordinaria y en campañas electorales; los criterios de asignación y requisitos de acceso a la prerrogativa; los efectos o incidencia de la asignación de financiamiento público en la calidad de la contienda y la representación; los criterios de asignación de financiamiento público a las distintas candidaturas para garantizar su competitividad y, se reitera, evitar la injerencia de actores ajenos a la función electoral o la comisión de actos de simulación, como la omisión de reporte de la totalidad de recursos que reciben, haciendo nugatorio el alcance de la actividad fiscalizadora como mecanismo eminentemente de transparencia y rendición de cuentas.

En el mismo sentido, se deberá atender a otros aspectos que no forman parte del cálculo propiamente dicho, pero se encuentran muy relacionados, como la participación ciudadana y la cultura política, la militancia efectiva, máxime cuando, como algunas iniciativas lo proponen, estos aspectos podrían llegar a formar parte del cálculo de financiamiento; es decir, cómo dichos factores pueden repercutir en la asignación de recursos a las fuerzas políticas, máxime cuando concurren otras variables que no podrían soslayarse, como la variabilidad y fluctuación de la participación y los bajos niveles de cultura política, así como el número de militantes y simpatizantes efectivos de cada partido político, y el ejercicio de la facultad de autoorganización para la determinación de cuotas y otras aportaciones para militantes y simpatizantes.

La finalidad última es lograr mayor eficiencia en el sistema de financiamiento público, pero sin afectar o generar retrocesos en los avances que se han alcanzado en las últimas décadas en aras de mayor equidad y transparencia y que ello contribuya, asimismo, a revertir situaciones irregulares o de desventaja que impiden la plena competencia electoral en condiciones de equidad entre las distintas fuerzas políticas y sus candidatos.

Por último, no pasa desapercibido que cualquier reforma al sistema de financiamiento o algunos de sus componentes debe venir aparejada, necesariamente, del fortalecimiento del sistema de fiscalización, para que éste se encuentre en condiciones de detectar irregularidades o deficiencias en rubros novedosos y que actualmente carecen de regulación o ésta es deficiente o precaria: intervención de la delincuencia organizada a través de empresas fachada o mediante lavado de dinero; recursos que no son reportados a la autoridad; mecanismos de cooperación y coordinación entre autoridades y órganos de gobierno, independientemente de su ámbito de competencia y nivel de gobierno al que correspondan; sustanciación expedita de los procedimientos administrativos sancionatorios, detectar y corregir actos de triangulación de recursos u otras simulaciones, entre otros.

Conclusiones

En los apartados precedentes se ha analizado que el financiamiento público a partidos políticos atiende a necesidades y circunstancias de un país en un momento determinado, de manera que no existen fórmulas o modelos únicos o idóneos que deban ser replicados en un país u otro de manera mecánica, sin hacer un estudio exhaustivo y pormenorizado a las circunstancias particulares de la sociedad en la que se pretende implementar, la problemática a atender o resolver y las posibles implicaciones o consecuencias de la determinación que se adopte.

Acorde a lo anterior, se ha observado que existen diversas modalidades de financiamiento a partidos políticos. Entre las modalidades analizadas se encuentra el financiamiento estrictamente público, es decir, que no permite financiamiento privado; el financiamiento meramente privado, cuando no hay aportaciones estatales o públicas a los partidos políticos, y mixto, cuando se encuentran previstas ambas modalidades, bajo determinados requisitos, condiciones, procedimientos. Asimismo, dichas modalidades de financiamiento admiten tipologías, específicamente directo, cuando el financiamiento consiste en dinero, o indirecto, cuando se aporta en especie o a través de otro servicio.

En el caso de América Latina, la gran mayoría de países ha adoptado el financiamiento mixto, presentando variaciones en cuanto a requisitos, condiciones y procedimientos para su cálculo, procedencia, asignación y mecanismos de control.

Por lo que se refiere al caso particular de México, la configuración actual del sistema de financiamiento a partidos políticos surgió, en primera instancia, como mecanismos de apoyo a los partidos políticos con la finalidad de procurar mejores condiciones de competitividad y equidad en la contienda; más adelante se vendría adecuando el marco normativo para la asignación de dicha prerrogativa en cuanto a cálculo del monto de financiamiento, los criterios, requisitos y condiciones de asignación y, en consecuencia, también se implementó un sistema de fiscalización cuya finalidad primordial es conocer el origen, monto y aplicación de los recursos, advertir posibles irregularidades y adoptar las medidas necesarias a efecto de corregirlas.

Ahora bien, en los últimos años ha habido, diversos partidos políticos e, incluso, el Ejecutivo Federal, han manifestado su preocupación por los crecientes montos de financiamiento que se asignan a las propias fuerzas políticas, por lo que han presentado diversas iniciativas con propuestas de reducción del monto a asignar bajo diversos criterios y procedimientos.

Si bien resulta necesario llevar a cabo un análisis de la normatividad que rige el financiamiento de partidos políticos y que la fórmula y criterios vigentes no son inamovibles o inmutables, cualquier reforma que se lleve a cabo no podría alterar o revertir los avances que se han alcanzado ni las contribuciones del sistema de financiamiento público y, en sentido amplio, de las prerrogativas de que gozan los partidos políticos al régimen democrático del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de que una reforma de tal magnitud y alcance sea producto del consenso entre las fuerzas políticas, previo un amplio proceso deliberativo entre fuerzas políticas, especialistas y ciudadanía en general para determinar cuáles son las necesidades y circunstancias que motivan o justifican la necesidad de la reforma y cuál debe ser el sentido de la misma para tutelar y privilegiar el desarrollo democrático del país.

Bibliografía

- Ace Project. 2022. Financiamiento Público. Ace Project. Disponible en: <https://aceproject.org/aces/topics/pc/pca/pca02/pca02a/pca02a5> (Consultada el 29 de julio de 2022).
- Bautista, R. D. 2021. Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento público para partidos políticos, recibida del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de junio de 2021. En *Gaceta Parlamentaria* No. 5812 (29 de junio). Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/jun/20210629.html#Iniciativa15> (Consultada el 20 de julio de 2022).
- CFE. Código Federal Electoral. 1987. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4638888&fecha=12/02/1987&cod_diario=199597 (Consultada el 20 de julio de 2022).
- Clouthier C. M. 2015. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo. En *Gaceta Parlamentaria* No. 4418-IX (3 de diciembre). Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/20151203-IX.html#Iniciativa9> (Consultada el 20 de julio de 2022).
- COFIPE. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 1990. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_orig_15ago90_ima.pdf (Consultada el 20 de julio de 2022).
- , 1993. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_ref03_24sep93_ima.pdf (Consultada el 20 de julio de 2022).
- CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1963. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_061_22jun63_ima.pdf (Consultada el 20 de julio de 2022).
- , 1977. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf (Consultada el 20 de julio de 2022).
- Del Castillo, P. 1985. La financiación de partidos y los candidatos en las democracias occidentales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Delgado C. M., 2020. Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena. En *Gaceta Parlamentaria* No. 5497-I (14 de abril). Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200414-I.html#Iniciativa2> (Consultada el 20 de julio de 2022).
- Duverger, M. 1981. Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica.
- INE. Instituto Nacional Electoral. 2022. Financiamiento público. Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/financiamiento-publico/> (Consultada el 20 de julio de 2022).
- LEF. Ley Electoral Federal. 1963. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=204953&pagina=2&seccion=0 (Consultada el 20 de julio de 2022).

- LFE. Ley Federal Electoral. 1973. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=197310&pagina=5&seccion=1 (Consultada el 20 de julio de 2022).
- LFOPPE. Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 1977. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4672344&fecha=30/12/1977&cod_diario=201306 (Consultada el 20 de julio de 2022).
- Presidencia de la República. 2022. Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Electoral. En *Gaceta Parlamentaria* No. 6012-XI (28 de abril). Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf> (Consultada el 20 de julio de 2022).
- Ramos R. L. 1998. La financiación de los partidos políticos en América Latina: Estado actual y propuestas de reforma. En *Revista de Estudios Políticos*. No. 102 (Oct.-Dic.) 321-37. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/46750/28234> (Consultada el 25 de julio de 2022).
- Reformas Políticas en América Latina. 2022. Financiación. Reformas Políticas en América Latina. Disponible en: <https://reformaspoliticas.org/reformas/financiacion/> (Consultada el 29 de julio de 2022).
- Sánchez González, S. 2000. “La financiación de los partidos políticos en los Estados Unidos”. *Teoría y realidad constitucional*. No. 6 (2º semestre 2000): 71-81. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/199617.pdf> (Consultada el 25 de julio de 2022).
- Von Beyme, K. 1995. La clase política y el estado de partidos. Madrid: Alianza Editorial.
- Zovatto, Daniel. 2003. “Estudio comparado de las características jurídicas y prácticas del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina”. *Política, dinero e institucionalización partidista en América Latina*. México: Universidad Iberoamericana Puebla.
- , 2019. “El financiamiento político”. *Derecho Electoral latinoamericano*. México: Fondo de Cultura Económica.